



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA LABORAL

Medellín, junio 23 de 2022

Radicado: 05001- 31- 05-**001-2016-01310-01**  
Demandantes SANDRA PATRICIA JARAMILLO PÉREZ  
Demandados COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COLABORAMOS  
SALUD Y LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR  
COMFENALCO ANTIOQUIA  
Asunto: CONTRATO REALIDAD - PRESTACIONES

La Sala Sexta de Decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

**ANTECEDENTES**

A través de la acción judicial, pretende la actora la declaratoria de una única relación laboral con el empleador Comfenalco entre el 27 de julio de 2008 al 13 de abril de 2011, donde la CTA Colaboramos Salud fungió como simple intermediaria. Bajo esta premisa reclama el reconocimiento de prestaciones sociales, reajuste

salarial, derechos laborales e indemnizaciones causados desde el hito inicial hasta la terminación de la relación laboral.

**Como respuesta a la acción Comfenalco** expuso que la señora Jaramillo Pérez inició una vinculación laboral con esta entidad el 14 de abril de 2011 la que culminó el 20 de diciembre de 2013 por mutuo acuerdo, momento en que se suscribió una transacción.

Expuso que este ente es ajeno a la CTA Colaboramos Salud, entidad con la que se suscribieron varios contratos comerciales para la prestación de servicios en el programa EPS Régimen Contributivo de Comfenalco, siendo la CTA la encargada de realizar las tareas con sus asociados, sin que se configurara solidaridad en las obligaciones con estos.

***En sentencia que desató la primera instancia***, el A quo, tras determinar que no existe duda de la vinculación laboral con COMFENALCO entre el 14 de abril de 2011 y el 20 de diciembre de 2013, declaró que previo a tal vinculación la señora Jaramillo Pérez, en particular desde el 21 de julio de 2008 prestó servicios para esta accionada bajo una intermediación con la CTA accionada, figura que se usó de forma irregular en tanto no se cumplieron los requisitos de la naturaleza del trabajo asociado; por el contrario se demostró que esta entidad societaria no era propietaria de los medios de producción, no había un sistema de autogestión, no se encargó de la realización de un proceso para un resultado específico y si quedó establecido que la CTA realizaba las labores en instalaciones y con herramientas de Comfenalco, entidad de quien recibía instrucciones, directrices, imposición de horario y vigilaba la ejecución, aunado a que la actora una vez se vinculó directamente con Comfenalco continuó prestando la misma función.

Empero concluyó que las obligaciones laborales generadas entre el 14 de abril de 2011 y el 20 de diciembre de 2013 quedaron saldadas con la transacción suscrita

por las partes, por lo que declaró la prosperidad parcial de la excepción de cosa juzgada,

Respecto a las obligaciones previas, teniendo claro que la relación laboral culminó el 20 de diciembre de 2013 y que la acción judicial se incoó el 11 de noviembre de 2016 declaró próspera la excepción de prescripción respecto a todos los emolumentos generados en vigencia de la contratación a través de la CTA, salvo lo referente a las cesantías, las que se hicieron exigibles a la terminación del vínculo, frente a la cual se declaró la excepción de pago en tanto la actora confesó que a la terminación del vínculo con la CTA fueron satisfechas las obligaciones.

Así las cosas, declaró la existencia de una relación laboral con Comfenalco entre el 21 de julio de 2008 y el 20 de diciembre de 2013, donde la CTA Colaboramos salud actuó como simple intermediaria, pero absolvió de las condenas monetarias.

Decisión que no fue recurrida por las partes, pero al ser adversa a las súplicas de la activa, de la misma conoce esta corporación en el grado de consulta (artículo 69 CSTSS).

### **CONSIDERACIONES**

Previo al análisis, en el presente evento resulta relevante poner de presente que se encuentra por fuera de discusión que: **1)** entre Sandra Patricia Jaramillo Pérez y Comfenalco existió una relación laboral con ocurrencia entre el 14 de abril de 2011 y el 20 de diciembre de 2013 (fls. 25/26), la que culminó por convenio entre las partes (fl. 30) **2)** que entre Comfenalco y la CTA Colaboramos Salud se formalizó un convenio comercial para la prestación a la primera de los servicios para el proceso y subprocesos de atención de actividades de promoción y prevención, diagnóstico y tratamientos de los afiliados a la EPS Comfenalco, con efectos a partir del 20 de junio de 2008 y por tiempo indefinido (fls. 79/81)

Así las cosas, atendiendo al objeto del litigio y las réplicas de la pasiva, dentro del grado de consulta habrá de analizar esta corporación si la demandante fue trabajadora subordinado de la Caja de Compensación Comfenalco en los hitos temporales que señala, al igual que la procedencia de pago de prestaciones sociales y beneficios laborales.

Pues bien, en el presente evento donde se pretende la declaración de existencia de una relación de naturaleza laboral, es relevante hacer hincapié en que, de conformidad a la Ley 79 de 1988, las Cooperativas de Trabajo Asociado, son empresa asociativa sin ánimo de lucro, cuyo objeto es el generar empleo para los asociados, desarrollando actividades económicas, profesionales o intelectuales orientadas a la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios y distribuyendo conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general.

Es así que tanto los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, reintegrando sus excedentes a los mismos cooperados en proporción al uso de los servicios o a la participación en el trabajo de la empresa, así como destinándolos a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos sociales.

Se genera entonces una modalidad de trabajo, con una prestación personal y retribuida del servicio; donde el asociado realiza unas actividades bajo un modelo de autogestión orientada por la misión del ente solidario, bajo los estatutos y no se encuentra mediada por el elemento de subordinación, ya que la gestión se ejerce de forma conjunta y organizada por todos los asociados. Es esta la línea que marca la diferencia con la prestación personal reglada por el Derecho Laboral, la que comporta un vínculo jerarquizado, de sometimiento a las reglas y directrices de un empleador.

En este sentido, debe tenerse presente que si bien se permite que estos entes contraten la ejecución de una labor a favor de terceras personas, no puede utilizarse este tipo de vinculación de forma fraudulenta para disfrazar la existencia de una verdadera relación subordinada, en desmedro de los derechos de los trabajadores asociados, evadiendo los pagos de derechos laborales legítimamente causados dentro de una verdadera relación laboral al servicio de una persona natural o jurídica (CSJ SL 6441 de 2015, que reitera lo expuesto en la sentencia de radicado 25713 de 2006)

Uso indebido de las CTA que no cuenta con respaldo jurídico y es reprochable de cara al objetivo que persiguió la ley al permitir el funcionamiento de esos entes cooperativos, es así que de acreditarse una intermediación laboral se entenderá que el beneficiario de la labor es el empleador, haciendo al beneficiario de la labor responsable solidario de las acreencias laborales, así lo indican los artículos 16 y 17 del Decreto 4588 de 2006:

*Artículo 16. Desnaturalización del trabajo asociado. El asociado que sea enviado por la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado a prestar servicios a una persona natural o jurídica, configurando la prohibición contenida en el artículo 17 del presente decreto, se considerará trabajador dependiente de la persona natural o jurídica que se beneficie con su trabajo.*

*Artículo 17. Prohibición para actuar como intermediario o empresa de servicios temporales. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o a terceros beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión con el fin de que estos atiendan labores o trabajos propios de un usuario o tercero beneficiario del servicio o permitir que respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación o dependencia con terceros contratantes.*

*Cuando se configuren prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos, serán*

*solidariamente responsables por las obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador asociado.*

Normas que buscan una protección al trabajador y el respeto a las acreencias que se generan en desarrollo de una actividad laboral dependiente, donde más allá de las formas utilizadas, nombres o incluso la creación de personas jurídicas independientes, se disfraza una prestación de servicio para evadir responsabilidades laborales. Al respecto la Sala de Casación de la CSJ en providencia SL 4565 de 2021, rememora los dichos de la sentencia SL 4479 de 2020 así:

*Si la empresa prestadora no actúa como un genuino empresario en la ejecución del contrato comercial base, bien sea porque carece de una estructura productiva propia y/o porque los trabajadores no están bajo su subordinación, no se estará ante un contratista independiente (art. 34 CST) sino frente a un simple intermediario que sirve para suministrar mano de obra a la empresa principal; o dicho de otro modo, se interpone para vincular formalmente a los trabajadores y ponerlos a disposición de la empresa comitente. Estos casos de fraude a la ley, conocidos en la doctrina como «hombre de paja» o falso contratista, se gobiernan por el artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo, en virtud del cual la empresa principal debe ser catalogada como verdadero empleador y la empresa interpuesta como un simple intermediario que, al no manifestar su calidad, debe responder de manera solidaria.*

*Por tanto, si bien la tercerización laboral es legítima, lo que no es legal es que a través de dicha figura las empresas se desprendan de sus plantillas para entregarlas a terceros que carecen de suficiente autonomía empresarial, bien sea que adopten la forma de cooperativas de trabajo asociado, sociedades comerciales, sindicatos (contrato sindical), empresas unipersonales, asociaciones u otro tipo de estructuras jurídicas.*

Con las premisas expuestas se descende **al caso concreto** hallando acreditada la prestación personal de un servicio remunerado de la actora en favor de la Caja de Compensación Comfenalco, en el periodo comprendido entre el 21 de julio de 2008 (fl. 19 y 24) y el 20 de diciembre de 2013 (fl.30) , vinculación que, entre el hito inicial y el 13 de abril de 2011 se ocultó bajo una contratación irregular con la CTA

Colaboramos Salud, entidad que sirvió como simple intermediaria en tanto el verdadero empleador lo fue la accionada Comfenalco. Para arribar a tal conclusión la entidad se valió de la prueba recaudada, así:

Fueron escuchados los testigos **Elena Patricia Montes, Carlos Alberto Vanegas Morales y Luisa Fernanda Escobar Montoya**, quienes al unísono refirieron que previo al año 2011 Comfenalco prestaba la atención en los laboratorios Biosigno a través de personal vinculado por Cooperativas de Trabajo Asociados, empero las tareas siempre fueron realizadas en las instalaciones de la EPS y con su instrumental.

En cuanto a las tareas desempeñadas por la accionante, las declarantes **Elena Patricia Montes y Luisa Fernanda Escobar** expresaron que Sandra Patricia Jaramillo fue su compañera de trabajo en el laboratorio biosigno de Comfenalco, donde aquella se desempeñaba como bacterióloga y realizaba funciones de toma de muestras a pacientes de la EPS de Comfenalco. Señalaron que las tareas se realizaban en una jornada impuesta por la EPS y cuyos turnos eran asignados por Marta Saldarriaga, una bacterióloga empleada de Comfenalco, quien fungía como coordinadora de su tarea, de quien recibían instrucciones, a ella se le informaban las novedades como permisos e incapacidades, además que era ella quien autorizaba la planilla donde se reportaban las horas extras.

Señalaron estas testigos que Sandra Patricia debía porta uniforme que tenía la insignia de "Biosigno" y que dentro del lugar de prestación del servicio no había personal de la CTA que coordinara su trabajo en tanto todo se realizaba a través de la bacterióloga Marta Saldarriaga, aunado a que los elementos de trabajo eran de propiedad de Comfenalco conforme al rótulo que todos tenían.

Respecto a la remuneración refirieron que de parte de la CTA siempre recibieron las compensaciones sin que tengan conocimiento de créditos insolutos para la accionante.

En cuanto a la terminación de la vinculación con la CTA, la testigo Elena Patricia Montes refirió que se produjo como una condición para pasar a trabajar con Comfenalco, sin que se adeudaran pagos en tanto la CTA pagó la liquidación, además de los aportes por ser parte de la CTA (tiempo de la audiencia 1:06:00)

A su turno **Carlos Alberto Vanegas Morales (tiempo de la audiencia 1:10:00 en adelante)**, personal administrativo de Comfenalco refirió que la labor de la actora en el área de laboratorio era bajo la supervisión de la CTA, empero al indagársele por la forma de asignación de funciones refirió que se organizaba bajo una estructura de coordinación, donde una persona denominada “PROFA” fungía como canal de comunicación entre la CTA y la Caja de Compensación, a través de ella se escalaban las quejas por la prestación del servicio, además que se implementaban los correctivos necesarios.

Manifestó no haber tenido contacto con la actora, pero que conforme a los reportes de la Caja y el modelo de prestación del servicio a través de la CTA la demandante prestaba el servicio de bacterióloga en los laboratorios de la EPS, donde debía portar uniforme adecuado para su función, servicio para el cual la Caja tenía un horario, pero la CTA asignaba los turnos de sus asociados.

Ahora en cuanto a los extremos de esta vinculación con la CTA, se cuenta certificaciones emitidas por esta entidad que indica que la señora Jaramillo Pérez presta sus servicios en la unidad estratégica de negocios de Colaboramos Salud, Comfenalco Antioquia como bacterióloga desde el 21 de julio de 2008 (fls. 19 y 24) hasta el 13 de abril de 2011, momento en que manifestó su voluntad de retirarse de la Cooperativa (fls. 23)

Con estos elementos de prueba se revela con suficiencia que la participación de la CTA solo fue instrumental y aparente, en tanto la actora no actuaba bajo un modelo de autogestión o por lo menos bajo la coordinación de la empresa solidaria a la que pertenecía; por el contrario se acreditó que las labores de la señora Jaramillo Pérez respondían a la misión de la EPS Comfenalco, quien proveía la planta física para la labor, suministraba los elementos de trabajo, la uniformó con distintivos de su laboratorio, además que se encargaba de la gestión y coordinación de las labores, sin que se acepten las explicaciones de la pasiva al catalogarlo como un modelo de coordinación o puente de comunicación, en tanto en la práctica se ejercían típicas funciones de control, vigilancia y subordinación, tales como la fijación de horario, autorización de ausencias laborales, identificación a través de uniforme, asignación de personal de dirección, entre otras.

Vínculo disfrazado que tuvo ocurrencia entre el 21 de julio de 2008 y el 13 de abril de 2011, día anterior a la formalización de la relación laboral con Comfenalco, por tanto ajustada fue la conclusión de la A quo quien declaró que fue esta accionada el verdadero empleador, donde la CTA Colaboramos Salud actuó como simple intermediario, siendo responsable solidaria en el pago de las acreencias laborales generadas.

Ahora, referente a las retribuciones propias del contrato de trabajo, se destaca que la actora en su interrogatorio dio lugar a una confesión en tanto al ser indagada por el cumplimiento de las obligaciones laborales expresó que todo fue pagado, que de la CTA recibió la liquidación de aportes y también le fueron consignadas las cesantías, al igual que le fueron consignadas las cesantías de los años 2011 a 2013, que Comfenalco pagó todas las prestaciones sociales y que para efectos de la terminación del vínculo con la accionada se hizo un acuerdo con el pago de una bonificación aclarando que *“en ese momento se me pagó todo lo que era de Ley”*. La declarante en ningún momento aclaró o rectificó sus dichos para afirmar que

producto de la relación laboral se quedó adeudando acreencia alguna. (minuto 35 en adelante)

En adición, la actora adosó la certificación de la CTA Colaboramos Salud que da cuenta de la aceptación de la decisión unilateral de retiro de la entidad solidaria explicando: *“queremos informarle que la cooperativa acepta su comunicación y por lo tanto procederemos a realizar la gestión pertinente para el pago de su liquidación de compensaciones y devolución de aportes sociales”* (fl. 23) misiva que no contiene ninguna anotación de la actora en señal de desaprobación, como tampoco se acredita que con posterioridad a tal data hubiera exigido, ora de la CTA, ora de Comfenalco el reconocimiento de acreencia alguna.

Referente al pago de aportes al sistema de seguridad social en pensiones a folios 34/36 aparece el histórico de cotizaciones que da cuenta de los pagos realizados por la CTA Colaboramos en salud entre los ciclos de julio de 2008 y 2011, destacando que los Salarios base de cotización guardan coincidencia con la remuneración informada en los certificados de folios 19 y 24, que se refieren al salario de los meses de agosto de 2010 y abril de 2011 a razón de \$2'251.000, lo que devela que la CTA honró los compromisos laborales, de forma puntual y de acuerdo a la remuneración pactada.

También resultan relevantes los dichos de la testigo Elena Montes quien expresó que entre los años 2008 a 2011 la accionante recibió las prestaciones, además que disfrutó de vacaciones (minuto 45)

Elementos de prueba que valorados en conjunto permiten establecer que pese a la figura de tercerización laboral usada por la Caja de Compensación Comfenalco, las labores realizadas por la actora fueron efectivamente remuneradas, no solo con el pago de la retribución mensual, pero además las prestaciones sociales y beneficios laborales que dada la subsunción en un acuerdo cooperativo fueron

denominados con los términos propios de este tipo de vinculación, como aportes, beneficios sociales, asignación por descanso, entre otros.

Denominación que no resta su poder para dar por satisfechas las acreencias laborales toda vez que el principio de realidad sobre las formas inspira todas las esferas de las vinculaciones entre los sujetos y no puede utilizarse de forma parcial en favor de una de ellas y negarse para la otra. Bajo esta premisa ha de reconocerse que dentro de la prestación de un servicio, se reconocieron unos emolumentos que en su periodicidad y cantidad se asimilan a aquellos que se generan en una relación laboral y pese al nombre que se asignó no hay lugar a desconocerlos e imponerlos nuevamente, en tanto es la misma prestación del servicio la que se remuneró, además que las normas que refieren a las consecuencias de la intermediación laboral no castigan tal situación irregular con el doble pago del servicio, al respecto la sentencia SL 2927 de 2020:

*“La censura reprocha que el Tribunal hubiera confundido los pagos efectuados en razón del vínculo asociativo, con los reclamados bajo la premisa de existencia de un contrato de trabajo. Estima que ello se opone a la responsabilidad endilgada a las accionadas, la irrenunciabilidad de los derechos laborales y la garantía de acceso a la justicia.*

*Para resolver, cumple memorar que al ocuparse de situaciones similares a la aquí estudiada, esta Corporación ha asentado lo siguiente:*

*Ahora, respecto de la excepción de compensación que alegaron en su favor la Cooperativa de Trabajo Asociado La Comuna y la institución educativa, es preciso señalar que no le asiste razón al demandante en cuanto afirma que no puede confundirse el pago de compensaciones que recibió en virtud de los acuerdos de trabajo asociado con los salarios y prestaciones sociales y, por tanto, se le adeudan estas obligaciones laborales. Ello porque tales pagos se generaron por la misma prestación de servicios que desarrolló a favor de la Universidad Cooperativa de Colombia, de modo que es procedente declarar próspera tal excepción, como acertadamente lo estableció el juez plural.*

(CSJ SL5595-2019)

*De acuerdo con este criterio, lo relevante es establecer si el servicio prestado en virtud de un contrato de trabajo realidad, fue remunerado en debida forma. Es decir, el principio de primacía de la realidad sobre las formas no se opone a que el juez del trabajo comprenda que se trata de una única labor la que debe ser compensada. Por el contrario, mal haría aquel en no apreciar en su total dimensión el contexto en el que se ejecutó el vínculo. Esto incluye, a no dudarlo, los valores entregados al trabajador bajo las condiciones establecidas en su momento.*

Así las cosas, encuentra la corporación que durante la vinculación laboral de la actora con Comfenalco a través de la CTA Colaboramos Salud fueron satisfechas las obligaciones laborales, por tanto no existe deuda insoluble objeto de condena.

Misma consecuencia que aplica para las obligaciones laborales generadas a partir del 13 de abril de 2011, toda vez que la actora en el interrogatorio de parte aceptó que Comfenalco satisfizo todas las acreencias laborales, sin explicar que Comfenalco hubiera quedado adeudando y por el contrario afirmó que a la terminación del vínculo Comfenalco “pagó todo lo que era de ley” (minuto 37)

En adición a folio 73 aparece el documento “liquidación contrato de trabajo” que informa del pago de salario, vacaciones compensadas, cesantías definitivas y sus intereses y prima de servicio, documento que aparece con la firma de la demandante, y frente al que no se presentó reparo alguno.

Acuerdo de terminación del contrato que tiene plena validez en tanto allí se establecen concesiones mutuas por la renuncia a derechos inciertos y discutibles, donde la señora Jaramillo Pérez recibió, además de las prestaciones y derechos laborales, la suma de \$8'451.340, el que comporta un monto considerable por cuanto representa 3.6 veces su remuneración mensual, sin que condiciones como la parte que haya gestado o elaborado el documento resten efectos a la misma, ya que la actora no demuestra algún tipo de engaño, coacción o su incapacidad para dimitir de vínculo laboral, criterio que de forma pacífica y constante ha sostenido la Sala de Casación Laboral de la CSJ, en providencia SL 2005 de 2021:

*“Es criterio pacífico en la jurisprudencia laboral que el mutuo consentimiento de dar por terminado el contrato de trabajo no “...exige esencialmente que la gratuidad sea el móvil determinante para uno o para ambos contratantes cuando quieran de consuno fenecer el contrato de trabajo. Bien puede una de las partes ofrecer a la otra una compensación en dinero o en especie para que acepte resciliar el contrato, sin que esa oferta pueda calificarse por sí misma como una forma de coacción o de violencia ejercida sobre la contraparte”.*

Por último, referente a la pretensión de nivelación salarial nulo fue el esfuerzo probatorio asumido por la activa, quien se limitó a aseverar que otras personas que desempeñaban la misma laboral tenían una remuneración superior, sin que nutriera tal afirmación de prueba alguna;

Fue así que las testigos Elena Montes y Luisa Escobar afirmaron que Comfenalco tenía en su planta de personal Bacteriólogas, pero de estas solo sabían su nombre, sin que identificaran su asignación salarial y mucho menos precisaran si entre estas y Sandra Patricia Jaramillo se cumplía con criterios de equivalencia como preparación académica, antigüedad, experiencia, funciones, entre otros. Por el contrario con el documento de folio 28 denominado “compromiso de ajuste al perfil del cargo” se le pone de presente a la accionante la necesidad de capacitarse en temas administrativos o calidad en salud, lo que devela que la actora tenía pendientes algunos requisitos académicos para satisfacer las necesidades del cargo de Bacterióloga conforme a las exigencias de la caja de compensación familia.

En suma, sin que producto de la relación laboral se quedaran adeudado salarios, prestaciones sociales y beneficios laborales, ora aquella que se disfrazó con la intervención de la Cooperativa de Trabajo Asociado Colaboramos Salud, ora aquella directamente con la Caja de Compensación y toda vez que la relación laboral culminó por decisión consensuada de las partes, sin que se demuestre vicio

que reste su validez, imprósperos son las súplicas de la activa, conclusión a la que arribó la falladora de instancia y que es confirmada por esta corporación.

Costas en primera instancia como indicó la A quo, sin costas dentro del grado de consulta.

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL**, confirma de forma total la decisión revisada en el grado de consulta.

Costas en primera instancia como indicó la A quo, sin costas dentro del grado de consulta.

Lo resuelto se notifica a las partes por Edicto.

Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

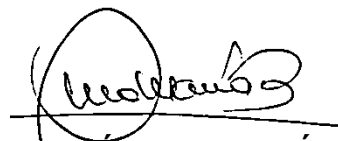
Los Magistrados,



**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**



**MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**



**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA LABORAL

**EDICTO VIRTUAL**

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la siguiente providencia:

Radicado: 05001- 31- 05-**001-2016-01310-01**  
Demandantes SANDRA PATRICIA JARAMILLO PÉREZ  
Demandados COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COLABORAMOS  
SALUD Y LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR  
COMFENALCO ANTIOQUIA  
DECISIÓN: CONFIRMA

Magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado hoy 28 de junio de 2022 a las 8:00 am, desfijado en el mismo día a las 5:00 Pm y se publica en la página web institucional de la Rama judicial por el término de 1 día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 idíbem. La notificación se entenderá surtida al término de fijación del Edicto

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS

**SECRETARIO**